



**Tras el Centenario de Francisco Franco...**

# De la legitimidad del Alzamiento Nacional

carlistas quienes la idearon y esgrimieron. Y ello con ocasión de prever que la rama dinástica que ellos defendían se pudiera agotar al morir sin descendencia don Jaime y don Alfonso Carlos, y que los derechos dinásticos iban a recaer en la rama liberal reinante a través del infante don Francisco de Paula y del cónyuge legal de Isabel II don Francisco de Asís. Esta teoría de la legitimidad de ejercicio no quería decir, como algunos creen, que los reyes se ilegítiman por su mal gobierno, porque en tal caso se haría a los súbditos jueces permanentes de sus príncipes y nunca faltarían motivos para discutir su poder. Significaba que los reyes que han abjurado de su origen histórico y en cierto modo sacral para aceptar el origen democrático del poder, es decir, el ser reyes «por la Constitución» y no «por la gracia de Dios», perdían toda legitimidad por abdicación de su propio derecho y dignidad. En sentido inverso ya habían utilizado esta teoría los príncipes reinantes al excluir de la sucesión a don Carlos María Isidro y a sus descendientes, cualesquiera fueran los derechos sucesorios que en el futuro pudieran advenirles.

**La pregunta que hay que hacerse debe responder a la objeción radical: ¿qué clase de legitimidad puede asistir al Alzamiento fuera de su necesidad o la ocupación del poder abandonado?**

Según la aplicación al caso de tal teoría, la legalidad democrática en qué se basaba tanto la República como la Monarquía Constitucional que le precedió sería válida, pero los últimos gobiernos habrían decaído de sus derechos por el mal uso del poder y la anarquía o la infiltración marxista a que habrían dado lugar. Esta argumentación, aunque responda a hechos reales, deja incólume la legalidad liberal basada en la Voluntad General y propicia el retorno a ella, tal como ha sucedido tras cuarenta años de «Régimen Nacional».

Creo que nadie en estos debates ha recurrido al argumento último y definitivo sobre la legitimidad vigente antes del Alzamiento y, consecuentemente, sobre la legalidad de éste. Los argumentos empleados son «a mayor abundamiento», pero no responden a la objeción radical: ¿qué clase de legitimidad puede asistir al Alzamiento fuera de su necesidad o la ocupación del poder abandonado?

Si en la época inicial de Franco las llamadas «dos Españas» se enfrentaron con las armas, y si —como se ha visto— esas dos Españas antagónicas subsisten, habrá

**Lo faccioso en España —históricamente— es el régimen liberal, y cualquier intento por restablecer el orden político de la España tradicional será plenamente legítimo de forma profunda e irrecusable.**

*Mucho se ha hablado del Alzamiento con motivo del Centenario de Franco, pero no se ha ido al meollo del asunto.*

que remontarse a la época en que ese antagonismo interno no existía para dilucidar de quién procede la ruptura, quién «tiró la primera piedra». Y fue precisamente en la invasión napoleónica, a comienzos del siglo pasado, cuando esa escisión se produce y comienzan las guerras llamadas civiles. Antes de ese momento sólo existía una España que acataba un solo rey y profesaba una misma fe católica. Los disidentes eran escasos y marginales, hasta el punto de que Menéndez Pelayo pudo historiarlos bajo el nombre genérico de «heterodoxos españoles».

El hecho determinante de esa ruptura será el que marque la ilegitimidad contra la precedente legitimidad. El será la rebeldía inicial o el hecho faccioso y rupturista. Y tal hecho es precisamente la convocatoria de las Cortes de Cádiz durante la misma Guerra de Independencia, en ausencia del rey y según el molde e inspiración de la Revolución Francesa. La posterior anulación por Fernando VII de tales reformas será un acto de restablecimiento de la legitimidad multi-secular.

## DOS RATIFICACIONES SEDICIOSAS

Aquel primer acto sedicioso (las Cortes de Cádiz) tuvo después dos ratificaciones igualmente sediciosas: la sublevación o traición de Riego en 1820 que proclamó de nuevo la Constitución de Cádiz abortando al mismo tiempo la expedición militar destinada a imponer el orden en América, y, trece años después, la violencia ejercida por la infanta Luisa Carlota y los liberales sobre el ánimo moribundo de Fernando VII que, variando el orden sucesorio, crearía la división dinástica y entregaría por todo un siglo el poder a los liberales. Cada uno de estos sucesivos y complementarios actos sediciosos tuvo como consecuencia inmediata un período extremadamente sangriento y anárquico: el trienio constitucional de Riego en que España pareció «un presidio suelto», y las matanzas de frailes de 1834 seguidas de las leyes desamortizadoras.

Si tal fue el origen de «las dos Españas» y de las continuas guerras civiles que culminan en la de 1936, habrá de concluirse que lo que es faccioso en España es el régimen liberal y que, por lo mismo, cualquier intento por restablecer el orden político y religioso de la antigua España será plenamente legítimo con la más profunda e irrecusable de las legitimidades. ■

## DE PLUMA AJENA

### El señor Aznar y las autonomías



S

ÑOR director:

Las recientes declaraciones del señor Aznar en Barcelona acerca de la «profundización autonómica» ponen de relieve una vez más la irresponsabilidad política de un partido, el PP, que está siguiendo siempre la táctica de la huida hacia adelante en un problema crucial como el de las autonomías, que se puede sospechar que fueron aplaudidas y estimuladas por los mentores internacionales de la transición política porque eran un medio infalible de debilitar a España e impedir que pudiera ser un día un serio competidor económico.

Cuando gente de cierto relieve en FRENTE NACIONAL tiene que admitir que un tan radical adversario ideológico nuestro como el señor Guerra tiene razón cuando dice que «al PSOE le ha tocado ahora la responsabilidad de defender el concepto de España como nación» (aunque creemos nosotros que por medios equivocados), y que «los demás están en un proyecto de subasta en la que todo vale con tal de arrancar un trozo de poder... y llegan a proponer a un nacionalista exacerbado como Jefe de Gobierno», cuando aplaudimos sin reservas las declaraciones del señor Solé Tura el Gobierno quiere una «identidad nacional y no la suma de 17 identidades», y comparamos estas palabras con el «proyecto» del señor Aznar, pensamos que la capacidad camaleónica del PP ha alcanzado cotas difícilmente superables.

Y remachando el clavo, las glosas del señor Vidal Quadras: «Este ambicioso proyecto tiene el riesgo de que podría ser aprovechado por los nacionalistas para segregar algunas comunidades de España, bien a través de la independencia, bien a través de una primera fase confederal.» Y pregunto: ¿cómo puede presentar un partido que dice que aspira a gobernar un proyecto que conlleva el riesgo de secesión?

El señor Aznar ha demostrado que no tiene la menor idea de un nacionalismo catalán que no nace de una conciencia nacional previa como se había hecho creer, falacia que sirvió para que lograra

cotas de poder con las que intenta crear esa conciencia. Por otra parte, el pedir lealtad constitucional a quienes han dicho inequívocamente cuáles son sus metas y que ya proponen fórmulas confederales es de una inocencia o de una ignorancia impropia de quien se presenta como alternativa de poder.

El problema de las autonomías sólo puede resolverse en sentido inverso al que pretende el señor Aznar, es decir, desandando el camino hasta llegar a la supresión de las mismas, lo cual es perfectamente compatible con descentralizaciones administrativas a distintos niveles y con el respeto y protección a todos los valores lingüísticos y de cualquier otra clase de las diversas regiones.

Uno de sus correligionarios, el señor Martín Villa, decía en 1979 que «no creía que racionalmente quepa una degeneración del autonomismo al independentismo». Esta opinión, que nosotros hemos combatido incansablemente, ha sido desmentida rotundamente por los hechos. A ver si escarmienta el señor Aznar y se abstiene de soplar sobre un rescoldo que puede abrasar a España, so pretexto de que es el mejor medio para apagarlo, ya que ello entraña una muy grave responsabilidad.

El Estado de las autonomías prescindiendo de otros aspectos aún más importantes «no es competitivo» en términos económicos y puede sostenerse que sin el monstruoso despilfarro generado directa o indirectamente por las mismas, la actual crisis no sería ni mucho menos tan intensa.

El interés de España no pasa por un reforzamiento del PP sino porque sus electores se cansen de que se les diga hoy una cosa y mañana otra, que se nieguen a capitular ante los nacionalismos y que se den cuenta de que no nos hallamos ante una crisis de partido sino de sistema, que sólo podrán resolver no quienes quieren arreglar el deteriorado coche político (valga la metáfora) que adolece de graves defectos de fabricación, cambiando de chófer, sino quienes preconizan que lo primero que hay que hacer es cambiar el coche o por lo menos repararlo a fondo.

**Samuel CLUA PALAU**

Presidente provincial de Frente Nacional  
Publicado en Segre (Lérida) (13-1-93)

## GALERIA

Rafael GAMBRA

C

ON el año 1992 terminó el centenario del Generalísimo Franco. No han faltado en él pequeñas conmemoraciones: números monográficos, mesas redondas en TV, varios libros, etcétera. Han abundado en ellas tanto los vituperios como las alabanzas a su memoria. Todos los artículos y los participantes en coloquios eran de los unos o de los otros, del vituperio o de la alabanza. Lo que no se ha visto es al neutral o al indiferente. Lo que pone de manifiesto que —con mayor o menor virulencia— «las dos Españas» siguen ahí, frente a frente, sobre este asunto o sobre cualquier otro.

Los «contra» —vituperantes— se hicieron fuertes, como era de esperar, en la cuestión de la presupuesta ilegitimidad del régimen de Franco. Repitieron por activa y por pasiva que carecía de cualquier forma de legitimidad, que se trató de un alzamiento de fuerza, de una sublevación contra el «poder constituido», de un «golpe» que sólo podría dar origen a una «dictadura» personal y arbitraria.

### ARGUMENTACION SUPERFICIAL

Los otros —los «pro»— no supieron en ningún momento responder adecuadamente a esa objeción y lo hicieron mal, superficialmente. Su argumentación se limitó a señalar la necesidad del Alzamiento dada la situación de anarquía creada bajo el régimen republicano y la clara orientación de éste hacia un Estado soviético. A lo más adujeron la revolución de octubre de 1934 como precedente rojo de un alzamiento, lo que equivale al recurso al «más eres tú»; o también la ilegalidad de la II República que nació de unas elecciones meramente municipales en las que, en rigor, habían ganado los monárquicos. Claro que a esa réplica habían podido contestar los vituperadores que la República recogió de la calle el poder que había sido abandonado, desertado y que apeló en seguida a unas Cortes Constituyentes dentro del sistema liberal.

En rigor y sin hacer mención de ello, los «pro» recurrían a la teoría de la doble legitimidad de origen y de ejercicio: soslayaban la primera pero negaban a aquella República la legitimidad de ejercicio al haberse deslegitimado por su actuación escandalosa.

Esta teoría de la doble legitimidad es de origen carlista. Quiero decir que fueron los

(SIGUE)